



**AUTO INTERLOCUTORIO**

<b>PROCESO</b>	Ejecutivo
<b>EJECUTANTE</b>	Porvenir S.A.
<b>EJECUTADO</b>	Jorge de Jesús Ochoa Espinal
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-006-2019-00215-01
<b>TEMA</b>	Excepción de prescripción
<b>DECISIÓN</b>	Confirma el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 088** de discusión de proyectos, dentro del proceso ejecutivo promovido por la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** contra **JORGE DE JESÚS OCHOA ESPINAL**, con radicado 05-001-31-05-006-2019-00215-01, procede a resolver la apelación contra auto interlocutorio.

• **AUTO RECURRIDO:**

En audiencia celebrada el 22 de marzo de 2023, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín resolvió declarar probada la excepción de prescripción formulada por el ejecutado.

• **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por Porvenir S.A., quien la sustentó en los términos siguientes: hizo alusión a providencia de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cartagena el 25 de marzo de 2021, que refiere a un asunto de similares características al actual, en el que se resolvió que es exigible para las AFP en cualquier tiempo el cobro a los empleadores de aquellos aportes a la seguridad social no pagados en favor

de sus trabajadores. También aludió a sentencia de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá del 10 de diciembre de 2021, en la que se hace referencia a la posición que frente al tema asumen tanto al Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. Insiste en que no debe declararse probada la excepción de prescripción, en la medida que la AFP ha realizado en debida forma las acciones de cobro.

- **ALEGATOS:**

Las partes no presentaron alegatos.

### **CONSIDERACIONES:**

La entidad ejecutante insiste en que no se debe declarar como probada la excepción de prescripción, toda vez que dicha figura no es aplicable en materia de seguridad social, específicamente en tratándose de los aportes a pensión de trabajadores; el juzgado del conocimiento declaró probada la excepción de prescripción, al considerar que, por tratarse de bienes de naturaleza parafiscal y conforme a lo señalado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, la prescripción extintiva es de 5 años.

Conforme a la apelación formulada por Porvenir S.A., el problema jurídico que abordará esta Sala del Tribunal se delimitará en establecer si se encuentra probada o no la excepción de prescripción formulada por la curadora ad litem del ejecutado, con relación a aportes a la seguridad social en pensión de trabajadores.

Para resolver el problema planteado, se debe partir de que esta Sala del Tribunal no desconoce el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social en pensión, pero únicamente en aquellos casos en que es el trabajador quien reclama estos ante su empleador. Ello se debe a la función tripartita que se da en este tipo de casos, esto es: *i)* el afiliado tiene a su cargo prestar su fuerza de trabajo; *ii)* el empleador cuenta con la obligación de pagar el aporte a pensión; y, *iii)* la AFP tiene la obligación legal de recaudar la cotización, alimentar la historia laboral del trabajador y requerir a los empleadores morosos en sus pagos.

Ahora bien, se debe destacar que en el presente asunto es el fondo de pensiones quien reclama ante el empleador moroso el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones a través de las acciones de cobro de que trata el artículo 24 de la ley 100 de 1993; sin embargo, no se puede pasar por alto el paso del tiempo como consecuencia extintiva de la obligación.

El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones acerca de la prescripción de los aportes a la seguridad social en pensión en aquellos casos en que la AFP reclama su pago al empleador, haciendo alusión a la naturaleza parafiscal de dichos dineros. Así se manifestó en providencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), dentro del proceso radicado 25000-23-27-000-2002-00422-01(16257), Consejera ponente doctora LIGIA LÓPEZ DÍAZ, en la que hizo un exhaustivo análisis, tomando en cuenta no solo la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado, sino también de la Corte Constitucional. En dicha providencia se dijo que los aportes al Sistema de Seguridad Social, sus recursos se captan a través de las cotizaciones y como tal no entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional, ya que se destinan para financiar el sistema general de seguridad social. Y que, al ser contribuciones parafiscales, para su cobro se debe aplicar el Estatuto Tributario, conforme al artículo 54 de la Ley 383 de 1997. Al respecto dijo la alta corporación:

*“Según el demandante los aportes al Sistema de Seguridad Social no son aportes parafiscales, pues ellos son los aportes al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar. La obligación de cotizar de los trabajadores al sistema de seguridad social emana del contrato de trabajo, es un derecho del empleado de carácter laboral, por lo que la prescripción de la acción de cobro es de 3 años conforme con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.*

*Pues bien, sobre el carácter parafiscal de los recursos de la seguridad social y su destinación específica conforme al artículo 48 de la Constitución Política, en términos de la Corte Constitucional, tales recursos son indispensables para el funcionamiento del sistema de seguridad social, y en esta medida están todos articulados para la consecución del fin propuesto por el Constituyente. Los mismos provienen básicamente de las cotizaciones de sus afiliados, establecidas por el Estado en ejercicio de su potestad impositiva<sup>1</sup>.*

*Como lo ha señalado la Sala, estas cotizaciones son contribuciones parafiscales, pues se cobran de manera obligatoria a un determinado número de personas para una destinación específica: satisfacer las necesidades en salud de esos afiliados, por tanto, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social, como expresamente lo señala el artículo 48 de la Carta Política, el cual no consagra ninguna excepción ni restricción<sup>2</sup>.*

*La prohibición de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella “comprende tanto los recursos destinados a la*

---

<sup>1</sup> Sentencia C-1040 de 2003.

<sup>2</sup> Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

*organización y administración del sistema de seguridad social como los orientados a la prestación del servicio, lo cual es razonable pues unos y otros integran un todo indivisible”<sup>3</sup>. Tampoco pueden ser objeto de acuerdos de pago con acreedores en casos de reactivación económica<sup>4</sup>.*

*Ha sido enfática la Corte Constitucional en considerar que estos recursos que se captan a través de las cotizaciones no entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional ya que se destinan a financiar el sistema general de seguridad social en salud<sup>5</sup>.*

*En consecuencia, contrario a lo que considera el demandante, estos aportes a la Seguridad Social sí son contribuciones parafiscales, por lo que para su cobro se debe aplicar el Estatuto Tributario, conforme al artículo 54 de la Ley 383 de 1997, según el cual, “las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del estatuto tributario nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993”. Como dentro de estas contribuciones se cuentan aquellas en favor del ISS, debe acudir a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, como lo pretende el actor.*

*Así las cosas, conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario, antes de la modificación efectuada por la Ley 788 de 2002, el término de prescripción era el siguiente:*

**“Término de Prescripción.** La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.

*La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.”*

*De acuerdo con lo anterior, la prescripción para el cobro de los aportes patronales opera en 5 años y como los valores u obligaciones fueron determinadas en la Liquidación Certificada de la Deuda, título ejecutivo, se analizará el siguiente cargo sobre su validez, para establecer cuándo fue su ejecutoria y el inicio del término de prescripción.”*

Además, la Corte Suprema de Justicia es del criterio que, la finalidad de la prescripción extintiva no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo. Y, toda vez que estos aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión son aportes de naturaleza parafiscal, le son aplicables la prescripción de 5 años de acuerdo a lo estipulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 53 de la ley 1739 de 2014.

Por auto del 6 de septiembre de 2019, el juzgado del conocimiento resolvió librar mandamiento de pago en contra del señor Ochoa Espinal y en favor de Porvenir S.A. por la suma de \$35.068.534, que corresponden a aportes a pensión adeudados entre julio de 1995 y mayo de 2006; de otra parte, la liquidación realizada por la AFP data del 21 de marzo de 2019

---

<sup>3</sup> Sentencia C-1040 de 2003.

<sup>4</sup> Sentencia C-867 de 2001 MP Manuel José Cepeda Espinosa

<sup>5</sup> Sentencia C-577 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Doctrina reiterada en las Sentencias SU-480 de 1997, T-569 de 1999, C-821 de 2001, entre otras

De lo anterior se desprende que, entre la fecha de pago de cada uno de los aportes a pensión adeudados y su reclamación transcurrieron más de 5 años, viéndose afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción. Por lo que providencia merece ser **CONFIRMADA** en tal sentido.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por Porvenir S.A., son de su cargo y en favor de la curadora ad litem del ejecutado. De conformidad con lo señalado en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$580.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,**

**RESUELVE:**

Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>